

Manuel Espinar Moreno (Editor)

HISTORIA DE ALMORADÍ. AGUA Y PAISAJE



LIBROSEPCCM,
Estudios, NÚM. 19
GRANADA, 2017

MANUEL ESPINAR MORENO (EDITOR)

Manuel Espinar Moreno
Historia de Almoradí. Agua y Paisaje

© Manuel Espinar Moreno
© HUM-165: Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales

www.librosepccm.com www.epccm.es/net/org

Diseño de cubierta: Manuel Espinar Moreno. Motivo de cubierta: Vista de la Iglesia de Almoradí. Maquetación: Manuel Espinar Moreno

Digibug, identificador: <http://hdl.handle.net/10481/47368> :

Edición del Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos. www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



AJ. The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-

AGUA, COYUNTURA Y PODER. TRANSFORMACIONES EN LOS REGADÍOS DEL AZUD DE ALFAYTAMÍ DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII²³²

David BERNABÉ GIL²³³

INTRODUCCIÓN

El análisis del regadío, como el de cualquier otra forma de intervención humana sobre el entorno natural -inseparable y reveladora de una determinada opción social- se hace más esclarecedor cuando se aborda desde planteamientos que atienden tanto a sus elementos estructurales como a los factores de cambio; que inciden en las permanencias, pero también en las modificaciones que la dinámica histórica, en su complejidad, ha ido introduciendo²³⁴. Ocurre a menudo, sin embargo, que no resulta fácil detectar y aquilatar cuales pudieron haber sido esos hitos significativos, capaces de reconducir, con su desigual impacto, el devenir de un sistema hidráulico determinado. La insuficiente información disponible acerca de los acontecimientos, más o menos relevantes, que han podido influir de algún modo en la evolución de un espacio irrigado ha mediatizado frecuentemente su adecuado conocimiento y comprensión en la larga duración. Y, en ocasiones, incluso ha podido distorsionar las valoraciones acerca de los procesos de conformación iniciales, así como del alcance efectivo de algunos hitos destacados de su desarrollo posterior.

²³² Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAR2016-77305- P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

²³³ Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, c. e.: David.Bernabe@ua.es

²³⁴ Una reciente y oportuna puesta al día de algunos debates al respecto, para el caso valenciano, con amplia información bibliográfica –que ahorra aquí mayores precisiones–, en Tomás Peris Alben-tosa, «Las huertas valencianas: La necesaria actualización de los postulados de Mass, Glick y Ostrom», *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 12- 1, (2015), pp. 349-383

Que los regadíos están lejos de poder contemplarse como estructuras fosilizadas, casi inmutables desde los momentos fundacionales, que apenas variaron desde su constitución, es apreciación que quizás no reclame demasiada insistencia. Pero no estarán de más algunas breves consideraciones al respecto; para señalar que, al menos, son dos los ámbitos susceptibles de experimentar transformaciones a medio y largo plazo. Por un lado, el referente a la configuración física, técnica o material; que vendría definido por los elementos constructivos conformadores de un sistema hidráulico determinado. En el caso del Bajo Segura, comprenderían fundamentalmente los mecanismos responsables de la elevación para la toma de aguas –generalmente un azud, o una noria-, las redes de distribución y de drenaje –materializadas en acequias y azarbes, jerarquizadas en diversos niveles- y las fórmulas de desviación para el riego –mediante paradas o *de corrible*. Por otro, no cabe despreciar las posibles mutaciones operadas a lo largo de las distintas etapas históricas en las fórmulas adoptadas para la regulación y control del riego, desde un criterio social e institucional. Se trataría de atender, en este caso, a todo lo concerniente a las diferentes autoridades, instituciones, corporaciones y sistemas jurídicos que llegaron a desarrollar competencias en la materia.

Las hipotéticas transformaciones que a lo largo del tiempo pudieron operarse, tanto en la configuración material de un sistema hidráulico determinado como en la organización social adoptada para su administración y gestión, no son ajenas a una serie de variables, de entre las que –para esta ocasión- me interesa destacar fundamentalmente dos. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta las diferentes coyunturas económicas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo; pues no puede ser igual el modo en que responde un sistema hidráulico a un período claramente expansivo que a otro de prolongada recesión. Y en segundo término, tampoco cabe ignorar las cambiantes relaciones de poder que se establecen entre las diversas instancias susceptibles de desplegar atribuciones o capacidad de actuación sobre el regadío, e incluso entre quienes ejercen algún tipo de dominio efectivo, aunque este no esté institucionalmente formalizado. A este respecto, conviene recordar que, en una época preestatal –como es la que aquí nos ocupa-, eran diversos los focos de emanación de la autoridad, así como las jurisdicciones; lo que propiciaba frecuentes colisiones y disputas por el control de ámbitos de poder supuestamente compartidos.

Naturalmente, habría que tener en cuenta también otros factores que, de alguna manera, pudieron incidir significativamente en aquellas transformaciones. Por mencionar algunos, los cambios climáticos y las alternancias de periodos prolongados de sequías y de lluvias torrenciales pudieron afectar a la organización del regadío e inducir la adopción de estrategias diversas de adaptación, con repercusiones de índole tecnológica y en la red de irrigación. Tampoco

ha de presumirse que los diferentes usos del agua permanecieran inmutables a largo plazo, pues, además del riego, los caudales podían ser utilizados como fuerza motriz para los molinos –cuyo número tendió a crecer- o para mantener o impulsar otro tipo de actividades, como la pesca o la ganadería –en el caso de los almarjales. La propia dinámica social y de la propiedad de la tierra, así como la desigual difusión de determinados sistemas de transmisión –los vínculos, la amortización eclesiástica, el régimen matrimonial y hereditario- introducen, en fin, nuevos elementos de análisis con indudable incidencia en la evolución del regadío.

Mas, como ya ha sido mencionado, en las páginas que siguen primará el doble enfoque centrado en la cambiante coyuntura económica y en la dinámica de las relaciones de poder, entendidas en sentido amplio, a lo largo de un período que abarcará no más de dos centurias²³⁵. Y, como ámbito de observación, me centraré especialmente en la zona de riegos que, en su momento, dependió directamente del azud de Alfaytamí, aunque a veces se aluda asimismo a espacios fronterizos que, de alguna manera, pudieron verse afectados por cambios operados en aquella. Ello incluye, concretamente, las huertas correspondientes a los actuales municipios de Almoradí, Daya Nueva, Formentera y Benijófar, con sus aledaños correspondientes.

La tratadística hidráulica tradicional, cuando se ha interesado por la historia de los regadíos en esta zona –y en el Bajo Segura, en general-, ha tendido a subrayar varios hitos fundamentales, de entre los que se han destacado, en lo que a su vertiente material se refiere, particularmente tres: la construcción del macrosistema de irrigación, al menos en sus piezas esenciales, por la civilización de Al-Andalus; las colonizaciones del Cardenal Belluga, en el segundo cuarto del siglo XVIII, que representó la bonificación y puesta en cultivo de unas 40.000 tahúllas –originando los municipios de Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri-; y, entre ambos, la construcción de azudes, como es el caso de Alfaytamí, que en 1832 Roca de Togores fechaba –de forma inexacta, aunque el dato no ha dejado de repetirse desde entonces- entre 1571 y 1615²³⁶.

Sin negar ni cuestionar el incomparable protagonismo de estos acontecimientos clave en el proceso de conformación histórica de los regadíos de la zona indicada, su indudable significación contribuyó a forjar cierta imagen de inmovilismo, aplicable a las etapas restantes, cuando se trataba de ofrecer un

²³⁵ Constituye fuente de inspiración de este enfoque el planteamiento con que abordaron el estudio de otros sistemas de irrigación no muy alejados M^{ra} Teresa Pérez Picazo y Guy Lemeunier, en «Agua y coyuntura económica. Las transformaciones de los regadíos murcianos (1450-1926)», *Geocrítica*, 58, (1985), págs. 7-87. Sirva la similitud del título como particular y modesto homenaje, *in memoriam*, a ambos autores.

²³⁶ José Roca de Togores: *Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela*, Benito Monfort, Valencia, 1832, pág.

relato de la dinámica hidráulica a lo largo de la historia. La escasez de información referente a esos largos períodos huérfanos de noticias pudo sustentar, así, cierta creencia de que, antes de la obra de Belluga, la huerta habría permanecido de un modo no muy diferente a como la encontraron las tropas cristianas de Alfonso X y Jaime I, a mitad del siglo XIII, cuando iniciaron la ocupación del territorio recién conquistado. Las prospecciones en fuentes documentales inéditas y la reconsideración de otras ya conocidas están revelando, no obstante, un panorama algo diferente del que cabría deducir de aquellas supuestas certidumbres de foto fija, para mostrarnos un mayor dinamismo en un espacio tradicionalmente asimilado con el inmovilismo.

Siendo objetivo fundamental de estas páginas mostrar algunas de las iniciativas hidráulicas adoptadas en la zona de referencia durante el período anterior a las colonizaciones de Belluga y -aunque de más incierta comprobación- sus posibles consecuencias en el proceso de conformación de la huerta, su punto de partida se remonta, no obstante, solo hasta los albores de la Edad Moderna. Obviaré, por tanto, cualquier referencia a épocas anteriores, con la esperanza de que los colegas medievalistas, dado su más profundo conocimiento de las fuentes documentales del periodo precedente, continúen ocupándose de desentrañar lo que en este hallaren digno de mención²³⁷. Y, puesto que ya se ha dicho que se tratará de contextualizar aquellos posibles cambios, acentuando sus relaciones con las dos variables mencionadas en el título, importa, antes de nada, pergeñar una somera descripción de la situación existente a principios del siglo XVI, tanto desde el plano material como social-institucional.

²³⁷ Aunque para la época medieval continúan siendo escasas las referencias directas a la zona que aquí nos ocupa, contienen información algunos estudios sobre regadíos del Bajo Segura en ese período, de entre los que cabría destacar, Sonia Gutiérrez Lloret, «El origen de la huerta de Orihuela entre los siglos VIII y XI. Una propuesta arqueológica sobre la explotación de las zonas húmedas en el Bajo Segura», *Arbor*, CLI, 593 (1995), págs. 65-93; Rafael Azuar Ruiz y Sonia Gutiérrez Lloret, «Formación y transformación de un espacio agrícola islámico en el sur del País Valenciano: el Bajo Segura (siglos IX-XIII)», *Castrum*, 5 (1999), págs. 201-211; Manuel de Gea Calatayud, «La construcción del paisaje agrario en el Bajo Segura. De los orígenes hasta la implantación de la red de riego-drenaje principal en el Alfoz oriolano», *Alquibla. Revista de Investigación del Bajo Segura*, 1 (1995), pp. 65-99; del mismo, *Los regadíos medievales y su evolución histórica en el Bajo Segura. Poblamiento, poder social y comunidades campesinas*, Orihuela, 2012; Miriam Parra Villaescusa, «Cambios en el paisaje, agua y explotación agrícola de la huerta de Orihuela (siglos XIII-XVI). Una aproximación», en Concepción Villanueva Morte, Diego A. Reinaldos Miñarro, Jorge Maíz Chacón e Inés Calderón Medina (eds. científicos), *Jóvenes medievalistas. Lorca 2012*, Universidad de Murcia, Murcia, 2013, págs. 91-110; de la misma, «Control del agua y poder en la frontera sur valenciana: la huerta y campo de Orihuela durante la Baja Edad Media», *Roda da Fortuna. Revista electrónica sobre Antiguidade e Medievo*, Volume 2, Número 1-1 (2013), págs. 470-500 (https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/36234/1/2013_Parra_Rodada-Fortuna.pdf)

SITUACIÓN DE PARTIDA: LA HUERTA A PRINCIPIOS DEL QUINIENTOS²³⁸

Aunque el azud de Alfaytamí acabará erigiéndose en el elemento nuclear en torno al cual se articule el regadío de la huerta, hasta el último cuarto del siglo XVI no pasó de ser un artefacto provisional y efímero, construido con estacas de madera y broza mezclada con arcilla, destinado fundamentalmente a proporcionar caudal a un molino harinero ubicado en el paraje del mismo nombre. Mas no parece que abasteciera de agua corriente, de forma permanente, a ninguna acequia del entorno. La denominada -ya desde tiempos de los sucesivos «repartimientos» posteriores a la conquista- acequia de Almoradí, que distribuía el líquido elemento por toda la huerta del pueblo del mismo nombre, en su margen izquierda, y luego se adentraba en el término de la baronía de La Daya, tenía su boquera aguas arriba, dentro del núcleo urbano de Orihuela; y su recorrido no era otro que el de la posteriormente denominada Acequia Vieja de Almoradí. Así pues, después de irrigar inicialmente parte del término oriolano en las inmediaciones del Camino de Almoradí, tanto por el cauce principal como por las arrobas de Tell y de San Bartolomé, dicha acequia atravesaba luego el actual término de Benejúzar, antes de penetrar en el paraje de Alfaytamí, desde donde conducía su ya mermado caudal por la actual acequia mayor y por varias arrobas, entre las que sobresalían las del Pla y del Riu, antes de desaguar finalmente en el almarjal. Constituía este una extensa zona palustre que se extendía desde Catral hasta Guardamar, delimitando, a través de una oscilante línea fronteriza, la zona de cultivo de la correspondiente al humedal. La fluctuante divisoria entre la huerta propiamente dicha y el dominio del almarjal, en función de la cambiante incidencia climática y de la coyuntura económica, seguía de cerca, de forma aproximada, los actuales límites septentrionales de los municipios de Catral, Almoradí, Daya Nueva, Daya Vieja y Guardamar.

También en la margen derecha del río Segura se extendía una alargada franja de huerta que pasaría a formar parte del término de Almoradí, integrada por varias fincas, en su mayor parte de gran tamaño —y que también incluían tierras de campo—, como eran las conocidas como San Pedro Martir, Matet, la Algorfa, las Bóvedas, La Juliana y Torre de Fels, a la que seguía Benijófar, ya en término de Guardamar. Toda esta zona se irrigaba a través de la acequia de Alquibla, cuyo origen estaba aun más alejado que el de la ya mencionada acequia de Almoradí, pues se ubicaba en las proximidades de la frontera con Castilla, aunque en término de Orihuela.

²³⁸ Resumen en este epígrafe la información ya ofrecida en David Bernabé Gil, *Almoradí en la edad moderna (ss. XVI-XVIII)*, Ayuntamiento de Almoradí, Almoradí, 2013, págs. 99-102, 124-126, 128-129; donde podrán encontrarse las referencias documentales pertinentes.

Si, a efectos de dotaciones hídricas, la huerta de Almoradí —en ambos márgenes del Segura— dependía de caudales procedentes de Orihuela, esa subordinación con respecto a la ciudad también se materializaba desde el punto de vista institucional; ya que aquella no constituía término municipal propio y autónomo, Siendo el rango correspondiente a Almoradí el de aldea, lugar o *carrer* dependiente de Orihuela, su entidad territorial apenas sobrepasaba, pues, la de mero distrito administrativo de cara a la recaudación del diezmo eclesiástico —bajo la jurisdicción de la parroquia local de San Andrés Apóstol. Y si bien el pueblo contaba con autoridades pedáneas, estas ejercían por delegación de los oficiales municipales de Orihuela, en quienes residía la jurisdicción y el derecho de nombramiento anual. También en la zona de riegos de que nos ocupamos se hallaba la entidad poblacional de Daya Nueva; con un rango bien distinto al de Almoradí. Se trataba en este caso de un señorío cuyo titular —el linaje oriolano de los Masquefa— ostentaba la jurisdicción baronal, que incluía el mero y mixto imperio y, en consecuencia, implicaba un elevado grado de independencia respecto de la ciudad realenga de Orihuela.

Ciertamente, estas diferencias de rango jurisdiccional entre la aldea realenga de Almoradí y la baronía de La Daya se difuminaban bastante en lo referente a la administración efectiva del regadío, puesto que en ambos casos las poblaciones permanecían supeditadas a la jurisdicción privativa ejercida por el sobrecequero o juez de aguas con sede en Orihuela. No obstante, la preeminencia y autoridad de este magistrado se plasmaban con mayor rotundidad en el caso de Almoradí, donde aquel disponía de un cequero para resolver en su nombre los asuntos internos que pudieran suscitarse entre los regantes del lugar; mientras que en Daya Nueva la jurisdicción baronal del señor pudo limitar algunas de las competencias que el sobrecequero oriolano pretendía ejercer en su dominio.

Finalmente, como rasgo destacable más directamente relacionado con la vertiente social de la situación que presentaba la huerta, cabe anotar, en lo referente a Almoradí, que la mayor parte de la tierra pertenecía aquí a propietarios domiciliados en Orihuela. Además, muchos de ellos estaban integrados en la baja nobleza de *cavallers* y en una categoría de transición con el estado llano, conocida como *ciutadans honrats*, que, de manera conjunta, controlaban los resortes del poder municipal urbano. Tal es lo que se deduce claramente del cotejo de los datos aportados por un padrón general de regantes confeccionado en 1535, por un lado, con la relación nominal de vecinos de ambas poblaciones correspondiente a ese mismo año, por otro. Asimismo, junto a esta notoria preponderancia de los terratenientes oriolanos, destaca el elevado grado de concentración de la propiedad, ya que, en conjunto y eliminando el territorio de La Daya, más de las tres cuartas partes de la huerta de Almoradí estaba en manos de solo el 20 por ciento de los propietarios. En el otro extremo, la mitad de los

regantes no llegaban a alcanzar las 2,5 hectáreas de tierra irrigada, que, en la época, marcaba de forma aproximada el límite del nivel de subsistencia familiar. Concentración y, al mismo tiempo, fragmentación eran, por consiguiente, rasgos ya observables a principios de la edad moderna, que dibujaban una clara polarización social de la propiedad.

INICIATIVAS ESPOLEADAS POR LA EXPANSIÓN DEL QUINIEN-TOS

A medida que avanzaba el siglo XVI, una vez superadas las prolongadas secuelas del conflicto agermanado que asoló la comarca –y buena parte del reino de Valencia, en 1520-21-, la expansión demográfica que revelan los vecindarios²³⁹ no tardaría en reflejarse en varias iniciativas emprendidas en la huerta, orientadas a incrementar su capacidad productiva. Fundamentalmente, se trató, por un lado, de ganar tierra a los almarjales y saladares mediante la desecación de algunas zonas en la periferia de la huerta; por otro, de incrementar las dotaciones hídricas a través de profundas remodelaciones de la red de irrigación y de la construcción, en silleras de piedra y mampostería, de un azud de derivación. Ambos tipos de actuaciones se producirán, además, en contextos político-institucionales no exactamente equiparables.

El primero de los objetivos mencionados cuenta, al menos, con dos hitos significativos, que se extienden en una cronología amplia y con escasa solución de continuidad. Aunque futuras investigaciones quizás consigan encontrar algún día precedentes anteriores de intentos bonificadores, fue en 1558 cuando se presentó, por un total de 12 regantes de la zona, un plan de actuación conjunta en el paraje conocido como «el Saladar del Aljeminado», consistente en la prolongación y modificación de los cauces de los azarbes de Abanilla y Mayayo, con la expresa finalidad –según reconocían los promotores- de extender el cultivo, a costa de desecar una zona indeterminada de almarjales y saladares. La solicitud, presentada ante el consistorio oriolano, contó con el respaldo expreso de sus autoridades, que otorgaron los permisos correspondientes y los terrenos necesarios de forma gratuita –ya que se trataba de tierras comunales-, siempre que se convirtieran efectivamente en panificables. En la lista de peticionarios encontramos a miembros de la mediana y baja nobleza oriolana, como D. Pedro de Rocafull, con extensas propiedades en Catral; el Lugarteniente del Gobernador de Orihuela, Pedro Carbonell, y su hijo Luis; y un caballero del linaje de los Ferrández de Tuesta, integrante de la oligarquía

²³⁹ José Ojeda Nieto, «Almoradí en el siglo XVI. Apunte socio-demográfico», *Alquibla*, 6, (2000), págs. 515-539.

municipal. Pero también figuran algunos labradores de diverso calibre pertenecientes a familias residentes en Almoradí, como eran los Ardit, Català, Cullera, Arnau, Pérez, Guterris y Girona²⁴⁰.

Llevar a buen puerto una empresa de ingeniería hidráulica que se presentaba de forma colectiva precisaba, no obstante, de algo más que respaldo institucional. Los costes de financiación, asumidos enteramente de forma privada, y el entendimiento entre los promotores eran importantes variables a tener en cuenta; y a ello se sumaba el irremediable grado de incertidumbre que siempre se cernía sobre la permanencia de las conquistas al almarjal, en buena medida dependiente de las impredecibles oscilaciones climáticas. Sea como fuere, no hay que dar por sentado que los hipotéticos avances producidos en la zona adquirieran rango de definitivos. En realidad, no es mucho lo que puede asegurarse sobre el desenlace final de la empresa; si acaso, una mención realizada veinte años más tarde sugiere que no debió tener mucho recorrido.

En noviembre de 1578, en efecto, los jurados de Orihuela hacían constar que, con fecha 20 de agosto de 1558, se había concedido a Pere Carbonell un lote de 1.000 tahúllas en los almarjales de Almoradí, con la condición de reducirlas a cultivo en el plazo de 5 años. Al no haber cumplido aquel el compromiso contraído, dicho dominio revertía de nuevo a la ciudad, para disponer de él a voluntad, toda vez que una nueva oleada de peticionarios había acudido a solicitar almarjales en aquella zona con fines desecadores. Al mismo tiempo, se conminaba a todos los que hubieran recibido lotes anteriormente, para que los pusieran de inmediato en cultivo, si no lo habían hecho ya, so pena de perderlos. Y, tras reservar a Carbonell un total de 400 tahúllas en concepto de nueva concesión, las autoridades oriolanas procedieron ahora a distribuir 18 lotes de 200 tahúllas a otros tantos peticionarios²⁴¹. Ante la demanda suscitada, un par de meses más tarde —en enero de 1679— aun se sumaron otras 1.000 tahúllas más, distribuidas en otros cinco lotes de las mismas dimensiones²⁴². Y aunque no sabemos si esta dinámica tuvo continuidad en los dos años siguientes, puesto que faltan las actas correspondientes, sí hay constancia de que en 1582 fueron repartidas a cinco solicitantes otras 1.000 tahúllas²⁴³.

Por consiguiente, fueron al menos 6.000 las tahúllas de almarjales otorgadas entre 1578 y 1582 —comprendidas entre la actual pedanía del Saladar y la antigua estación de ferrocarril— para potenciar la extensión del cultivo, al

²⁴⁰ Archivo Municipal de Orihuela [AMO]: *Contestador de 1558*, fols. 590-592v.

²⁴¹ AMO: *Contestador de 1578*, fols. 92-100.

²⁴² AMO: *Contestador de 1579*, fols. 8, 10, 10v, 40, 89-90v.

²⁴³ AMO: *Contestador de 1582*, fols. 3-3v, 37.

tiempo que se pretendía ganar en salubridad –debido a la estrecha vinculación establecida en el imaginario colectivo entre epidemia y aguas estancadas- y colmar las aspiraciones de ciertos sectores interesados en incrementar sus terrazgos. Entre estos, y a diferencia de los antiguos beneficiarios de la concesión de 1558, predominan abrumadoramente ahora los avecindados en Orihuela, y muy particularmente individuos pertenecientes a –o vinculados a- la oligarquía que se repartía los oficios municipales –al amparo del procedimiento electoral de insaculación-, entre los cuales tampoco faltaban terratenientes tradicionales que ya disponían de parcelas en la huerta de Almoradí. Pero tampoco estas iniciativas impulsadas por las felices perspectivas que se abrían a una agricultura de orientación comercial en expansión parece que se tradujeron en resultados apreciables. Así cabe deducirlo –entre otros indicadores- de la comparación de dos padrones de regantes confeccionados en 1535 y 1601, que muestra un incremento de la huerta sujeta a derramas de poco más de 500 tahúllas²⁴⁴. La lucha contra el almarjal exigía, además de esfuerzos inversores y de coordinación, una constancia que no todos estaban dispuestos a asumir, especialmente en momentos de dificultades.

Más posibilidades de éxito, al menos a corto y medio plazo, cabía augurar a los proyectos orientados a las remodelaciones de la red, mediante apertura de nuevos cauces o readaptaciones de los ya existentes. Un precedente del primer tipo cabe ubicarlo en 1555, en una zona, si no inserta, sí al menos fronteriza con la huerta de Almoradí, donde las actuaciones a emprender, en cualquier caso, no podían dejar de afectarla. En dicho año, los pobladores de Catral –que también era aldea dependiente de Orihuela- obtuvieron licencia para abrir una nueva acequia en el cauce del río, poco antes de llegar al molino de Alfaytamí, por la que conducir el agua directamente hasta su huerta, dada la penuria del caudal que aquellos recibían a través de la Acequia de Callosa en su tramo final. También en este caso desconozco los pormenores de ese plan, pero lo cierto es que a finales de la centuria se detecta un buen tramo de dicha acequia, expresamente denominada de D^a Ana Rocafull, que, si bien no llegaba hasta la huerta de Catral, irrigaba en torno a 1.000 tahúllas, distribuidas entre 5 grandes propietarios. De nuevo, nos hallamos ante otra iniciativa propia de una época de expansión, encabezada por grandes y medianos terratenientes, con intereses agrarios alejados del núcleo urbano, pero con una evidente proyección en el consistorio oriolano²⁴⁵.

Si la acequia de D^a Ana experimentó posteriormente alguna remodelación de importancia –a la que en su momento me referiré-, también en la periferia o alrededores de la huerta de Almoradí, pero en este caso en las proximidades del

²⁴⁴ David Bernabé Gil, *Almoradí....*, op. cit., págs. 122, 126-127.

²⁴⁵ *Ibidem*, pág. 101.

sistema de la acequia de Callosa, se adoptaron iniciativas orientadas a la mejora del regadío, antes de culminar la centuria, con efectos en este caso bastante más duraderos. Me refiero a lo que podríamos calificar como los posibles orígenes del acueducto del Mudamiento, cuya singularidad radica en la reutilización de aguas muertas con fines de irrigación. Fue en 1593 cuando, en varias actas de comunidades de regantes de la arroba de Arginent, tributaria de la acequia de Callosa, y de avenantes al azarbe de Abanilla, se debatió sobre los efectos de la realización de alteraciones en dichos cauces, que parecen apuntar a la apertura de un nuevo edificio. Se menciona allí la realización de varias «paradas» y de un *mudament* en el azarbe de Abanilla, al objeto de aprovechar su caudal para el riego, entre las que destaca la construida por el caballero Joan March. Este terrateniente oriolano, propietario de 633 tahúllas en la zona –la mayor parte de ellas irrigadas por el brazal de la Velaera a la sazón síndico de dicha arroba de Arginent, y consiguió la aprobación, por la correspondiente comunidad de regantes –en sesión a la que asistieron solo cinco grandes propietarios, que acumulaban más de 1.000 tahúllas-, de la concertación de un empréstito y de las derramas necesarias para hacer frente al coste del *mudament* que se estaba realizando. Tales actuaciones motivaron la oposición de los propietarios avenantes al azarbe de Abanilla, que, durante el año de 1594, introdujeron el pleito ante el tribunal de la Gobernación²⁴⁶15. La mención esemismo año, finalmente, a la inminente construcción de una canal justamente en la heredad de uno de los propietarios directamente implicados, sugiere que las obras adquirieron cierta relevancia; aunque por el momento no se dispone de datos más clarificadores al respecto.

LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD DE ALFAYTAMÍ Y LAS REMODE- LACIONES DE LA RED EN SU ENTORNO²⁴⁷

Pero los proyectos más ambiciosos durante estas décadas finiseculares, en que todavía se dejaban sentir los favorables efectos de una coyuntura expansiva sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias, fueron los llevados a cabo en el paraje conocido como Alfaytamí. Como resultado de una serie de actuaciones, no siempre interconectadas -y desplegadas a lo largo del tiempo-, en las que se mezclaron iniciativas procedentes de varias comunidades de regantes y promociones privadas, antes de finalizar la centuria quedó configurado un paisaje hidráulico en la zona muy diferente del existente en 1571, cuando se dio el primer paso para su futura transformación. De lo que se trataba, en ese

²⁴⁶ AMO: Lib. nº 72: *Sobresequier, 1592-1595*, fols. 50-55, 221-222, 228-229.

²⁴⁷ Se resume en este epígrafe la información ya ofrecida en David Bernabé Gil, *Almoradí...*, op. cit., págs. 102-124, donde se refieren asimismo las fuentes documentales en que se basa.

momento, era de construir un azud de piedra capaz de resistir los frecuentes embates de las avenidas del Segura, para garantizar caudales de agua que permitieran irrigar tierras de la huerta que tenían dificultades para ello debido a su altitud, al tiempo que abastecer a un antiguo molino existente. Más que de ampliar el perímetro de irrigación procurando que el agua llegase hasta los confines de la huerta -pues ese objetivo podía alcanzarse mediante las desecaciones de almarjales-, se perseguía fundamentalmente asegurar el agua que precisaban los diferentes cultivos de la huerta, además de evitar que el molino redujera su actividad durante el estiaje.

En virtud de acuerdo suscrito el 30 de agosto de 1571 entre el síndico de los regantes de Almoradí -Luis Carbonell, antiguo beneficiario de almarjales en el saladar-, el Señor de la Daya y el propietario del molino, se resolvió edificar el mencionado azud, que vendría a sustituir a otro anterior, provisional y efímero, a modo más bien de empalizada o *rafa*, construido tradicionalmente en madera y broza. Como ya detallé en otro lugar, las obras, comenzadas a partir de febrero de 1573, en que se pactaron los aspectos técnicos, resultaron fallidas al cabo de unos meses, al ser arrastrada la pared por una avenida del Segura. Y aun habrá que esperar más de dos décadas, concretamente hasta 1595, para que el viejo proyecto vuelva a retomarse, en un nuevo contexto institucional, y con un planeamiento ahora más ambicioso -y costoso-, para evitar que pudiera repetirse la rotura. Fue, en fin, en noviembre de 1598 -y no en 1615, como indicara dos siglos atrás el clásico tratadista Roca de Togores- cuando el edificio se dio por concluido. Hasta entonces, el azud de Alfaytamí no pasó de ser un frágil artificio construido con *atocha, terra y rames*, que había que reponer periódicamente, para generar un regolfo del que obtener el abastecimiento del agua que precisaban el molino y los regantes.

Puesto que -como ya se ha dicho- la huerta de Almoradí se irrigaba tradicionalmente por acequias procedentes de Orihuela, cuyos caudales llegaban ya bastante mermados, la construcción del azud solo tenía sentido si iba asociada a la apertura de nuevas boqueras que conectaran directamente los viejos cauces con el regolfo que la nueva obra producía. Y, en efecto, esta vinculación quedó claramente establecida por la comunidad de regantes en escritura de 15 de julio de 1571, por la que se otorgaban poderes -entre otros aspectos- para acordar las indemnizaciones pertinentes con los propietarios de tierras afectados por las obras de remodelación de la red. Es, por tanto, en virtud de este protocolo como surge la apertura del tramo inicial de la acequia Mayor -también denominada *Nova*- de Almoradí, al objeto de conectarlo con el cauce tradicional por el que discurría la acequia de Almoradí y La Daya, que ahora era reasumido en un solo acueducto, hasta que se bifurcaba, a través de la denominada acequia del *Pla* -o del Llano.

En cuanto al otro ramal preexistente, la denominada *céquia del Riu*, también habría de experimentar al poco tiempo una conexión directa con el cauce fluvial en el regolfo generado por el azud, alcanzando así su independencia funcional con respecto a cualquier otro acueducto. Pero, en esta ocasión, no fue la misma comunidad de regantes de Almoradí la que determinó las actuaciones a realizar, sino la constituida exclusivamente por los usuarios de dicho cauce, integrados en la acequia Vieja de Almoradí, en su último tramo, *de Benejússer en avall*. Las obras correspondientes se iniciaron en fecha desconocida, a instancias de uno de los mayores propietarios de la zona, Alonso de Leyva; y, tras su fallecimiento, fueron reemprendidas en aplicación del acuerdo adoptado por los regantes de la mencionada comuna, en sesión celebrada en Orihuela —donde estaban avecindados casi todos los propietarios— el 29 de septiembre de 1593; esto es, también en momentos anteriores a la construcción del azud definitivo.

Si las remodelaciones operadas en las acequias de la margen izquierda discurrieron de forma hasta cierto punto independiente, la única actuación llevada a cabo al otro lado del río se trató enteramente de una iniciativa privada y desligada de aquellas, incluso en su cronología. La empresa, en este caso, fue de mayor envergadura, pues se materializó en la excavación *ex novo* de una acequia cuyo recorrido superaba los cinco kilómetros, ya que tomaba el caudal en el azud de Alfaytamí y lo conducía hasta los confines de la huerta de Benijófar. Correspondió la iniciativa al Colegio de Predicadores de Orihuela, que en 1582 había adquirido la extensa heredad de dicho nombre —*Benijofer*—, tradicionalmente irrigada por la acequia de Alquibla, con origen en las cercanías de la frontera entre Murcia y Orihuela, así como por el caudal proporcionado por una noria de elevación, instalada en el río a su paso por la propia finca, en 1538. Como ambas fuentes de recursos hídricos resultaban insuficientes para garantizar el riego de tan extenso patrimonio, en 1586 los dominicos —bastante familiarizados con las explotaciones agrarias— decidieron la apertura de una nueva acequia, paralela a la de la Alquibla, aprovechando las expectativas abiertas por la construcción del azud, aun habiendo resultado ésta fallida. El principal problema que esta decisión comportaba no era de fácil resolución, ya que Benijófar estaba muy alejada de Alfaytamí y, en consecuencia, el proyectado acueducto debía atravesar un buen número de fincas ajenas. Sin embargo, los religiosos se las ingeniaron para negociar acuerdos puntuales con algunos propietarios —lo que no excluyó algún que otro pleito— y, finalmente, pudieron ver culminados sus deseos. En el primer padrón de regantes conocido posterior a dicha fecha, correspondiente a 1601, ya figuran como tributarios del Azud, al igual que otros propietarios cercanos, que también se acogieron al riego de la recién construida *céquia de Benijofer*, sentando con ello precedentes que luego seguirían algunos más.

Durante este proceso de reconversiones hidráulicas asociadas al azud de Alfaytamí que se acaba de resumir también se produjeron cambios en el marco institucional en que se inscribía el regadío. El más importante, sin duda, remite a la adquisición, en 1583, del título de universidad por parte de la hasta entonces aldea de Almoradí. Con ello, se dotaba a la población de magistraturas municipales propias, con capacidad para decidir la política a seguir, así como la determinación de la hacienda, al tiempo que se asignaba delimitación territorial, materializada a través del levantamiento de mojones. En lo que afecta más directamente al regadío, los privilegios de universidad, confeccionados con arreglo a un modelo común –operativo en todo el territorio valenciano–, no mencionaban el oficio de sobrecequero como uno de los constitutivos del nuevo organigrama consistorial; lo que podía plantear problemas cuando se tratara de ejercer jurisdicción propia, independiente y autónoma en materia de aguas. Es por ello –y por la reciente y cercana experiencia vivida en la vecina universidad de Callosa– que, al poco tiempo de obtenido aquel privilegio, los almoradidenses solicitaron y obtuvieron –en 1585– otro relativo al procedimiento electoral que habría de regular el acceso a los oficios municipales, con mención expresa –ahora sí– al de sobrecequero. De este modo, la huerta de Almoradí y, por extensión, toda la zona de riegos derivados del azud de Alfaytamí, pasaba a depender de la jurisdicción ejercida de forma ya independiente por un sobrecequero local, que era renovado cada año por sorteo, de entre el grupo de insaculados que se repartían los oficios consistoriales.

La aparente coincidencia temporal del inicio de las gestiones conducentes a la segregación municipal de Almoradí, por un lado, y de la culminación de la dinámica de concesiones de almarjales por parte de Orihuela en beneficio de residentes en la ciudad, por otro, permite interrogarse sobre las posibles relaciones entre ambos acontecimientos. No sería descabellado pensar, así, que al tratar de conquistar la independencia municipal se perseguía también el control de ese espacio jurisdiccional en beneficio de los almoradidenses. Sin embargo, en el amojonamiento del término asignado a la nueva universidad, la mayor parte de la zona de almarjales quedó finalmente al margen, permaneciendo incluida en territorio oriolano. Cercenada de este modo la posibilidad de asumir la gestión sobre los almarjales, la jurisdicción obtenida por Almoradí habría de proyectarse, por tanto, exclusivamente hacia la huerta tradicional. Y, en este ámbito concreto, tampoco podía resultar indiferente que la máxima autoridad, encarnada en la figura del sobrecequero, dejara ya de ser un mero lugarteniente designado desde Orihuela.

No obstante esta aparente conexión entre segregación municipal y remodelaciones hidráulicas operadas en la zona de Alfaytamí, en las decisiones conducentes a estas últimas los intereses oriolanos pesaron tanto o más que los de los vecinos de Almoradí. Y no se trataba solamente de los ya mencionados

promotores de la acequia del Río. También en las diferentes juntas celebradas por la comunidad de regantes donde se adoptaron las decisiones fundamentales, la iniciativa correspondió casi siempre a los terratenientes oriolanos; pues, al fin y al cabo, eran ellos los que acumulaban la mayor parte de la propiedad de la huerta. Y es que, tal como reiteradamente se expresó, el principal objetivo era conseguir que el agua llegara hasta las tierras más elevadas y difíciles de regar, algunas de las cuales se ubicaban en las grandes heredades. Pero, si la construcción de azud podía contribuir decisivamente a colmar estas expectativas productivas, la pésima gestión de sus elevados costes financieros abocó pronto a la comunidad de regantes a una dinámica de insolvencia galopante que, con el cambio de coyuntura y los inicios de la recesión, se convirtió en una amenaza para muchos propietarios y, a la postre, incidió en algunos retoques practicados en el interior del sistema.

SOBREVIVIR EN TIEMPOS DE DIFICULTADES

Si ya antes de que comenzara el nuevo siglo se observaron claros síntomas de que la situación estaba cambiando, a medida que avanzaba la centuria el pesimismo fue arraigando y extendiéndose entre la mayor parte de los regantes. Con tal de no satisfacer las elevadas derramas que se establecían año tras año para hacer frente a los créditos contraídos para la obra del azud y a los pleitos contra los morosos, algunos regantes llegaron hasta a renunciar a la propiedad, mientras otros se limitaban a dejar perder las parcelas menos productivas. En 1609 fueron eximidas del pago de una derrama un total de 2.142 tahúllas, pertenecientes a 46 regantes del Azud, *«per estar aquelles de molts anys a esta part mostrenques e incultes»*; y en 1617, de las 3.544 tahúllas irrigadas por la acequia del Pla, el recaudador aseguraba que había 725 *«tafulles hermes e incultes, les quals encara que ha executat no se ha pogut cobrar, per haverlas deixats sos amos com perdudes»*. Estas deserciones, junto a la pertinaz negativa de varios potentados a contribuir por las tahúllas que les eran asignadas, no solo multiplicaron la deuda acumulada, sino que —en una coyuntura adversa— contribuyeron a precipitar el creciente deterioro de la huerta²⁴⁸.

Para tratar de poner orden en todos los sistemas de riegos del Bajo Segura, ya que los problemas no afectaban solo al de Alfaytamí, en 1623 fue comisionado, como visitador real, el Dr. Jerónimo Mingot. De su intervención se derivaron unas célebres ordenanzas —que, por suficientemente conocidas, no es necesario glosar nuevamente—, varias sentencias judiciales y la opción propuesta a las comunidades de regantes para —si así lo decidían— repartir el agua en tandas. Convocados a este efecto, los herederos de la acequia mayor de

²⁴⁸ *Ibidem*, págs. 136-143.

Almoradí prefirieron continuar con sus prácticas tradicionales; pero los regantes de la acequia del Río –menos numerosos– sí procedieron a su distribución horaria, en función no solamente de la extensión de las fincas, sino también de su disposición o altura de cara al riego²⁴⁹. Se trató esta, seguramente, de la transformación más importante operada en el sistema de Alfaytamí durante el primer cuarto del siglo XVII, al margen de lo ocurrido en La Daya –de que trataré más adelante.

Aunque la depresión agraria y demográfica habría de prolongarse todavía varias décadas, determinando un desigual impacto entre los regantes, no faltaron iniciativas puntuales orientadas a conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos, con el menor coste posible; especialmente, en determinadas coyunturas en que algunos indicadores parecían apuntar –erróneamente– a posibles cambios en la tendencia general. El alza de los precios del trigo desatado a finales de los años veinte y prolongado durante buena parte de la década siguiente, por ejemplo, quizás estimulara a algunos emprendedores, cuyas iniciativas contaron con el favor de las autoridades del azud. Tal pudo ser el caso del caballero oriolano Francesç Masquefa, que en 1634 solicitó con éxito acoger su heredad del *Olmet*, de 400 tahúllas, irrigada a la sazón por la acequia Vieja de Almoradí, al riego de la acequia Mayor de Almoradí, bajo ciertas condiciones. Con ello, la mencionada finca regresaba a la comunidad de regantes a la que ya había pertenecido tiempo atrás, pues era una de las integrantes de la antigua acequia de D^a Ana Rocafull, cuya boquera al río había sido cerrada definitivamente en 1627 –probablemente al objeto de liberarse de las elevadas derramas de Alfaytamí–, para adherirse a la acequia Vieja. El escaso caudal que discurría por esta última en aquel paraje, que apenas permitía regar con regularidad, debió influir en aquella decisión. Y no se trató de un caso excepcional²⁵⁰.

Pocos años antes, en 1631, el canónigo de la catedral de Orihuela, Joseph Alenda, ya se había hecho eco de la suma escasez de agua que llegaba a la cola de la arroba de San Bartolomé, tributaria de la mencionada acequia Vieja, donde se ubicaba una finca de su propiedad; de modo que «en ella ha venido a ser el último en riego, porque los otros que había últimos le han podido tomar de otra parte». Desconozco si el canónigo acabó siguiendo los pasos de Masquefa; pero quien sí lo hizo pocos años más tarde fue el influyente Dr. Jaume Serra –muy relacionado con el consistorio oriolano–, que en 1640 consiguió que la acequia Mayor de Almoradí acogiera su heredad de 270 tahúllas, ubicada en

²⁴⁹ 18 *Ibidem*, págs. 130-132.

²⁵⁰ Para estos párrafos y los que siguen, salvo indicación en contrario, *vid.* David Bernabé Gil, *Almoradí..... op. cit.*, págs. 144-145.

la cercana partida de Cantalobos y tradicionalmente irrigada por la arroba de San Bartolomé.

Todas estos ejemplos de iniciativas privadas, surgidas en la zona de confluencia de los sistemas correspondientes a la acequias Vieja y Nueva de Almoradí, y orientadas a mejorar las dotaciones de aguas mediante traspasos desde la primera –deficitaria– a la segunda –excedentaria–, comportaban pequeñas obras de reconducción de aguas; pero también alteraciones en los repartos tradicionales. Si, pese a todo, la comunidad de Alfaytamí consintió en acoger a estos nuevos regantes, se debió, en gran medida, a que los nuevos caudales aportados por la obra del azud permitían la transferencia de algunos excedentes, y a la ampliación que comportaba de la nómina de contribuyentes en las ruinosas derramas que venían soportando.

Aunque la mayor parte de este tipo de actuaciones –seguramente mucho más numerosas de las que es posible rastrear en los documentos consultados– procedía de emprendedores privados, a veces también eran acometidas en nombre de la comunidad de regantes. Así ocurrió, por ejemplo, en 1651, cuando se decidió modificar el sistema de desagüe de la acequia Mayor hacia los almarjales de la Daya, mediante la sustitución del escorredor por el que tradicionalmente se venía realizando por la habilitación, a tal efecto, del azarbe nuevo. El objetivo confesado era ahorrar gastos en mondas, aunque con ello se perjudicara al señor de la Daya, que poseía un molino en *«lo cap de la dita Sequia de Almoradí y prinsipi del escorredor»* para aprovechar unas aguas que, con esta reforma, dejarían ya de transcurrir. De haberse llevado efectivamente a cabo, dicha iniciativa vendría a golpear de nuevo a la economía de uno de los regantes que más seriamente se había visto perjudicado por la construcción del azud.

LA CRISIS DE LA BARONÍA DE LA DAYA Y LA FUNDACIÓN DE LA PUEBLA

Dos décadas más tarde de su definitiva construcción, la obra del azud y la remodelación de la red de irrigación que aquella acarreo habían ocasionado efectos tan dispares entre los regantes como para que pudiera cuestionarse seriamente la generalidad de sus supuestamente benéficos resultados. Y, encabezando la lista de los más perjudicados, sin parangón con los demás, se situaba el señor de la Daya –actual Daya Nueva–, quien también arrastró en su declive –en cierta medida– a los vasallos que cultivaban sus dominios. Ya en 1608, una sentencia de la Audiencia de Valencia había condenado a D. Salvador Boil a satisfacer a la comunidad de regantes un total de 8.366 libras –más de lo que costó el azud– por las derramas impagadas y los intereses correspondientes.

Ante la imposibilidad de cobrar en dinero y las dificultades para hacerlo en frutos -ya que pendía concurso de acreedores sobre las rentas del señor-, en 1620 el síndico de los regantes consiguió adjudicarse por la vía ejecutiva una extensa porción territorial de la baronía la Daya. Concretamente, fueron 2.010 las tahúllas amputadas al señorío, cuya condición de patrimonio vinculado con jurisdicción de mero y mixto imperio no resultó -sorprendentemente- obstáculo insalvable para garantizar su integridad. La operación culminó a los pocos meses, cuando, en pago por la condonación de ciertas deudas, los regantes traspasaron el dominio de este rico patrimonio a su principal acreedor, D. Jerónimo Rocamora, quien, a precio de saldo -las dos terceras partes de su valor de tasación- se hizo con la base territorial sobre la que erigió al poco tiempo un nuevo señorío -al que más adelante me referiré-: la Puebla de Rocamora²⁵¹. La pérdida experimentada por el señor de la Daya debido a la acumulación de deudas contraídas con los regantes del azud no se limitó, empero, a esta amputación territorial. También la calidad y el rendimiento de las tierras que conservó bajo su dominio se resintieron sensiblemente, como consecuencia del desarrollo del proceso ejecutivo y de la desfavorable coyuntura agraria que la remodelación hidráulica vinculada al azud contribuyó a potenciar. Contrariamente a lo previsto, tras la construcción del azud la productividad de las tierras de La Daya habría experimentado un severo declive, pues -tal como aseguraba su titular en 1625- *«per haver massa aygua les terres de la Daya no donen tan bones collites y es fan almarjalenques»*. El retroceso del cultivo en la reserva señorial debió agudizarse, sin embargo, a partir de la pérdida de las 2.010 tahúllas operada en 1620. Al año siguiente, otro de los acreedores del señor, contrario a la venta ejecutiva recientemente practicada, aseguraba que aquél no sólo estaba dejando muchas tierras yermas e incultas, sino que, además, *«ha venut los bous y arreus de llauro que tenia ordinariament per a la cultura de dites terres»*²⁵².

Y la comparación de dos estimaciones realizadas por expertos en 1603 y 1631 permite corroborar estas apreciaciones. En la primera fecha, integraban el dominio consolidado del señor valiosas parcelas de huertos y moreral, que alcanzaban las 161 tahúllas de amplitud, y una vasta extensión de tierra blanca, comprensiva de 5.454 tahúllas. Tres décadas más tarde se mantenía la cifra relativa a la tierra hortal y moreral, pero la tierra blanca se había reducido -

²⁵¹ Cfr. más detalles sobre estas operaciones en David Bernabé Gil, «La formación de un patrimonio nobiliario en el Seiscientos valenciano. El primer Marqués de Rafal», *Revista de Historia Moderna*, 5, (1985), págs. 11-66; espec. págs. 21, 32-39.

²⁵² La información recogida en este párrafo y los que siguen, referente a la Daya, procede, salvo indicación en contrario, del voluminoso proceso judicial sustanciado en el segundo cuarto del siglo XVII entre el Azud de Alfaytamí y el señor de La Daya, custodiado en Archivo Histórico de Orihuela [AHO]: L-224.

descontadas ya las 2.010 tahúllas de la Puebla- a solo 1.679 –lo que representaba una pérdida neta de 1.765 tahúllas-, de las que más de la mitad, además, fue catalogada como *«junqueral y saladar....advertint que la terra saladar que està continuada...no l'ha soguejada, per ço que dits saladars no tenen fites ni señals per a poderse soguejar y en ells se pot amplear a molt més si volen»*.

Los imprecisos y fluctuantes límites del saladar explicarían la facilidad de aquel retroceso y las diferencias acerca de la extensión asignada a la Daya en los diferentes padrones de regantes y en las contrapuestas estimaciones realizadas al respecto por el señor y por la comunidad del azud. Así, frente a la posición señorial, que aseguraba que muchas de las tierras que le asignaban eran saladares y almarjales, por lo que solo aprovechaba tres días de riego de la tanda de ocho días de que disponía, la parte contraria argumentaba que las disposiciones forales equiparaban, a efectos contributivos, todas las tierras con acceso al riego con independencia de si lo utilizaban o no; que si se abriesen escorredores y azarbes serían muy buenas tierras para el cultivo y que, en cualquier caso, producían pingües rendimientos como pastizales para el ganado.

Junto a la parcial dejación del cultivo por parte del señor, es probable que también los vasallos hubieran descuidado sus atenciones para con las parcelas poseídas en enfiteusis, bien al haber tenido noticia de que estaba en marcha el proceso de ejecución judicial, bien, una vez consumada la venta, por el probable avance del saladar y del almarjal en sus aledaños como consecuencia de la sobreabundancia de agua. En las apreciaciones al respecto, no obstante, los datos parecen contradictorios. Ya en 1617 el colector de una derrama reconocía que en la Daya había muchas tierras perdidas, incluyendo las que el señor tenía establecidas a sus vasallos, pues *«sos amos les han deixats y están hermes per estar feta oferta per lo que deu lo señor de la Daya al azut»*²⁵³. Y en esa misma dirección de paulatino abandono apunta la tendencia observada en la evolución del vecindario que poblaba el señorío. En 1604 se computaron, a efectos de estimación de la renta señorial, un total de 37 casas establecidas a censo enfiteútico; y en 1622 se contabilizaron –según relación nominal de sus poseedores- 34 casas y 6 solares. Pero una década más tarde, aunque se mencionó la cifra de 40 casas sujetas a censo enfiteútico, se precisó que solo 15 de aquellas eran habitables *«y les demes patis ab algunes parets»*. De hecho, la víspera de Nochebuena de 1629, en la ceremonia correspondiente a la toma de posesión del señorío y recepción del preceptivo juramento de fidelidad por D. Ramón de Boil y Rocafull, se hallaron presentes únicamente 12 vasallos²⁵⁴. Y, a partir de 1632, en que se reactivó nuevamente el pleito contra aquel –por parte de la Comunidad de regantes- para continuar las ejecuciones judiciales,

²⁵³ AMO: *Mingot*, 1596-1624, fol. 232.

²⁵⁴ Archivo del Reino de Valencia [ARV]: *Manaments i Empares*, 1634, m. 54, fols. 1-5.

debió intensificarse aun más el abandono del señorío. La comparación entre los vecindarios de 1609 y 1646 reflejan, así, una drástica disminución de la población –integrada siempre, en su totalidad, por cristianos viejos-, al registrar un descenso desde 60 a solo 7 hogares²⁵⁵24.

Aunque resulta difícil medirla en sus justas proporciones y precisar su cronología con exactitud, todo apunta, por tanto, a una significativa des- población de la baronía, que se habría agudizado durante las décadas centrales de la centuria. En qué medida esta gradual deserción de los vasallos pudo afectar a la cuantía de la tierra cultivada por aquéllos tampoco es tarea que resulte fácil de calibrar. La comparación de los datos referentes a 1603 y a 1631 sugiere, por el contrario, un ligero avance de la tierra censada, al pasar de 1.275 tahúllas a 1.372; que, para la última fecha, representaba el 42 por ciento de la superficie total de la baronía. Es posible que estas estimaciones globales, que omiten cualquier relación nominal o individualizada, no se correspondan exactamente con la extensión realmente cultivada por los vasallos y que, al reflejar la cuantía sujeta al pago del censo enfiteútico, oculte el previsible impacto de algunos abandonos temporales de tierras marginales o, incluso, de un proceso de concentración del dominio útil en los escasos pobladores que iban quedando.

En cualquier caso, al menos durante estos años, más que la deserción de los vasallos, fueron las dificultades del señor para mantener el cultivo en las poseídas en pleno dominio el principal responsable de la creciente devaluación de la baronía. Y, tal como reflejan los datos relativos al rendimiento diezmal –que recogen la trayectoria de la producción triguera-, aun habrá que esperar medio siglo para que la dinámica productiva emprenda el camino de la recuperación definitiva²⁵⁶. Todavía en 1670, al suceder en el dominio de la baronía «por derecho de fideicomiso y mayorazgo» D. Guillem de Rocafull y Boil no ocultó su consternación por el lamentable estado en que «la ha hallado, de tan mala calidad que solo hay iglesia y tres cassas, con que no halla arrendador que entre en ella y no obstante los acreedores prosiguiendo antiguas execuciones tratan de que se venda por cortes»²⁵⁷. Afortunadamente para D. Guillem, la amenaza no tuvo efecto; y, durante la década siguiente, comienzan a detectarse ya claros indicios de recuperación. La crisis por la que atravesó la Daya constituye, en suma, una muestra más de la difícil situación en que se hallaba in-

²⁵⁵ Joan Serafí Badenes Martí, y Miguel Angel Bernat Martín, *Crecimiento de la población valenciana: análisis y presentación de los censos demográficos (1609-1857)*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1994, pp. 150, 173.

²⁵⁶ Gregorio Canales Martínez, «Relación entre nacimientos y producción agraria (siglos XVII-XVIII) en el Bajo Segura», en *Estudis sobre la població del País Valencià*, Alfons el Magnànim-Instituto de estudios Juan Gil-Albert, Valencia, 1988, vol. I, pág. 442.

²⁵⁷ 26 Archivo de la Corona de Aragón [ACA]: Consejo de Aragón [CA]: Leg. 666, doc. 89.

mersa la zona de riegos del azud de Alfaytamí y de las desiguales consecuencias que su prolongación podía acarrear.

Volviendo ahora a los fatídicos momentos en que se produjo la amputación ya señalada, la transformación en nuevo núcleo señorial de la base territorial constituida por esas 2.010 tahúllas transferidas a D. Jerónimo Rocamora no llegó a contrapesar la decadencia de La Daya, pues las primeras décadas de andadura de la recién creada baronía vecina apenas muestran signos de optimismo. La adquisición de la jurisdicción de mero imperio por D. Jerónimo sobre el nuevo núcleo de población que se proponía promover, con el nombre de La Puebla, le costó 2.000 libras, en forma de servicio en metálico a la Corona. Más, no contento, con la obtención de dicha merced real, en 1633 consiguió del municipio oriolano formalización, mediante establecimiento enfiteútico, de 2.000 tahúllas de almarjales limítrofes, que ya había obtenido graciosamente años atrás, al objeto de ampliar la base territorial de su nueva baronía. Ofrecía D. Jerónimo –inmerso en estrechas vinculaciones comerciales y financieras con el consistorio oriolano– realizar en ellas las obras de saneamiento necesarias para reducirlas a cultivo, a cambio de un exiguo censo de solo 5 sueldos anuales. Culminaba así una operación de largo recorrido que había contado con otros dos hitos importantes, en 1627 y 1631, al adquirir a sendos particulares dos lotes de tierra almarjal, de 2.000 y 400 tahúllas respectivamente. Pero, en realidad, el destino de toda esa zona lacustre inmediata a la Puebla fue el de majada para su extensa yeguada y vaquería, que estaba integrada por cerca de medio millar de cabezas de ganado mayor²⁵⁸.

La fundación de la baronía de la Puebla, a costa del territorio de La Daya, y la incorporación de una amplia zona de almarjales anexos, podían haber comportado transformaciones de relieve en esa zona de huerta dependiente del azud de Alfaytamí. Sin embargo, más que como proyecto colonizador, la operación parece que fue concebida por D. Jerónimo como estrategia para fortalecer las bases patrimoniales y jurisdiccionales del linaje nobiliario que tan decisivamente estaba contribuyendo a encumbrar y que culminaría con la posterior obtención del título de Marqués de Rafal. A diferencia de lo ya obrado en Benferri, cuya exitosa colonización había acometido en 1622, y de lo que al poco tiempo –en 1636– emprendería en Rafal, en La Puebla Rocamora no puso tanto empeño en conseguir el asentamiento efectivo de pobladores.

²⁵⁸ La información relativa a los momentos fundacionales de la Puebla procede de David Bernabé Gil, «La formación de un patrimonio...», *art. cit.*, págs. 32-39; y, para su evolución posterior, a que se refieren los párrafos que siguen, vid. del mismo autor, «El patrimonio de los Marqueses de Rafal (1639-1736)», *Revista de Historia Moderna*, 24, (2006), págs. 253- 304, espec.286-292. En ambos trabajos se indican las fuentes documentales pertinentes.

Si los abandonos que se estaban produciendo en La Daya tampoco auguraban –dada la desfavorable coyuntura– un éxito fácil a cualquier intento de atraer colonos que contribuyeran a una eficaz repoblación del nuevo núcleo señorial vecino, las reticencias de D. Jerónimo a ceder el dominio útil de las tierras recién incorporadas debió alejar más aun aquella posibilidad. La obtención del mero imperio le eximía de cumplimentar *a posteriori* el mínimo demográfico –quince casas– requerido por el fuero alfonsino para alcanzar categoría señorial; mientras que las óptimas cualidades del paraje para el aprovechamiento ganadero podían ahorrarle tener que involucrarse en costosas e inciertas iniciativas productivas de orientación agraria. Así pues, la explotación económica de la Puebla y de sus aledaños se llevó a cabo a partir del asentamiento, en no más de una decena de casas, de un reducido número de cultivadores de la tierra, algunos en calidad de jornaleros y otros mediante regímenes de tenencia distintos a la enfiteusis, consistentes en la partición al quinto de la cosecha. Que tan corta y precaria población, cuyo número solo alcanzaba las ocho cabezas de familia censadas en 1646, llegara a justificar en algún momento la existencia en dicha baronía de servicios como horno, panadería, carnicería, tienda y taberna, además de iglesia, –según consta en inventario realizado en 1645– no deja de resultar sorprendente, al tiempo que denota una clara voluntad de permanencia como núcleo poblacional por parte de su promotor.

Dos décadas más tarde, sin embargo, cualquier resultado en este sentido distaba de haber mejorado, al menos aparentemente, las hipotéticas expectativas iniciales. Un escueto inventario de 1666 refiere la presencia en la Puebla de «*quatre llauradors quinters que llauren ab bous*»; aunque, eso sí, el cómputo realizado de cabezas de ganado de labor –35 bueyes–, y de aperos y aparejos –10 arados, 15 rejas, entre otros– hacen pensar en la presencia asimismo de otros cultivadores adicionales. De hecho, el mismo documento alude, sin mayor precisión, a «*pobladors y vasalls y llauradors y alguns habitants*», como posibles categorías distintas de moradores en el señorío. Pero, teniendo en cuenta la orientación productiva que, al parecer, los marqueses de Rafal habían concebido para esta baronía, quizás no pueda hablarse propiamente de fracaso. Ese mismo año de 1666 el valor estimado de la baronía alcanzaba las 40.000 libras de moneda, que es la misma cifra que se repetirá en 1691. Aunque tal apreciación incluía –de forma indiferenciada– los almarjales anexos, hay que tener en cuenta que dos generaciones atrás había sido tasada en 11.500 libras. Por consiguiente, y a diferencia de lo ocurrido en la Daya, la prolongada etapa de dificultades por que atravesó la huerta apenas debió afectar a la baronía de la Puebla.

PERSISTENCIA DE LA CRISIS y RECUPERACIÓN FINISECULAR

Pese a la existencia de indicios que apuntan a una paulatina pero lenta recuperación en las dos décadas finiseculares, las que le precedieron continuaron mostrando síntomas de decadencia. Todavía en 1673 perduraban ciertas percepciones negativas sobre los graves problemas que había acarreado el exceso de humedad producido en la huerta de Almoradí a raíz de la remodelación iniciada un siglo atrás. Así lo expresaba el representante de las autoridades municipales de Orihuela: «antes que se fabricasse el Azud de Alfaytami todo el termino de Almoradi y la Daia se regava de la Asieca Vieja de Almoradi, que toma agua del azud grande que tiene el rio dentro de Origuela, y entonces era Almoradi de mas de 600 vezinos y avia muchas casas muy ricas y era el lugar maior de la Governacion, y desde que formaron el Azud la abundancia de agua a acabado de tal forma con aquella Universidad que oy no tiene sesenta vecinos y tan sumamente pobres que no pueden sustentarse, y el daño que tuvieron de aver sacado las aciecas nuevas le conocieron luego al punto, pues el primer año que usaron de las aguas se murieron mas de cincuenta personas cabos de casa, y desde entonces ha proseguido su ruina de tal forma que oy se alla en sus últimos alientos y les será conveniencia volverse a su antiguo riego; pues del Azud de Alfeytami solo sintió utilidad el molino que ay en el, que antes era muy pequeño y oy es uno de los mejores de este término, teniendo su dueño utilidad del daño común de todo este partido»²⁵⁹.

Aunque resulta indudable que el informante exageraba notablemente en sus apreciaciones, pocos años más tarde –en 1678–, un testigo interrogado sobre la capacidad productiva de una gran hacienda ubicada en dicha zona no vacilaba en sostener que:

*«les tafulles de la horta de la universitat de Almoradí estan tan gravades de censals que es corresponen a diferents persones y està tan inculta dita horta que les tafulles que es conrreen es més lo que es paga de derrames que se imposen casi tots los anys per a pagar los càrrechs del azut nomenat de Alfeytami, per a hon se reguen aquelles, que és més que lo que importen los fruits que es trauen de dites tafulles, pues de les que estan incultes no es coneix amo, y si de algunes de les incultes es coneix, les renuncia per no pagar dites derrames ne tenir de hon pagarlas, y en tal conformitat que és públich y notori que tots los que tenen tafulles en dita horta estan ab animo de dexarles»*²⁶⁰.

²⁵⁹ David Bernabé Gil, *Almoradí...*, op. cit., pág. 148.

²⁶⁰ *Ibidem*, pág. 149.

Seguramente, tampoco la imparcialidad era una de las cualidades destacables de este testimonio; pero disponía de ejemplos próximos en qué inspirarse. Pocos años atrás, en 1670, el síndico del azud había rechazado formalmente una propuesta de renuncia al riego de 70 tahúllas solicitada por una religiosa –sor Beatriu Cascante, monja profesa del convento de San Sebastián de Orihuela. Y al año siguiente aquél ya no pudo impedir que un decreto del Gobernador admitiera la decisión adoptada por los dominicos de Orihuela de cerrar definitivamente la acequia de Benijofar, tras casi una centuria de funcionamiento. En su lugar, prefirieron recuperar el riego tradicional de dicha heredad a través de la antigua noria y cauce anexo, expresamente adcentados al efecto. Que una institución tan experimentada en la explotación agraria, como era el Colegio de Predicadores, se decidiera por esta solución era síntoma evidente de la gravedad de los problemas que aun se cernían sobre la comunidad de Alfaytamí. Y no se trataba de una decisión aislada. Ya una década antes habían renunciado igualmente al dominio sobre su extensa heredad de Mayayo «por ser dicha renunciación en evidente utilidad del Colegio, por los muchos gastos de mondas y derramas que ocasiona dicha heredad, sin esperanças de ningún provecho». Y, muy próxima a la anterior, aunque inscrita en otra comunidad de regantes –correspondiente en este caso a la partida del Mudamiento-, otra heredad de 500 tahúllas perteneciente al Convento de la Trinidad de Orihuela, fue puesta a la venta por solo 1.000 libras de moneda, atendiendo a que solamente podía cultivarse la mitad, pues las tahúllas restantes *«están incultes y fetes almarjals y saladars y ab moltes junqueres salades y altres mates, que per a reduirles a cultiu se ha de despendre y gastar molt més de lo que valdrán y de la utilitat qu.es podrá traure de aquelles»*. Ni siquiera la extremada concentración que continuaba presentando la distribución de la propiedad fue capaz de amortiguar el impacto de la recesión entre las capas socialmente más favorecidas.

Esta prolongada etapa de dificultades habría de culminar en 1678 con una nueva epidemia de peste que, aun no alcanzando niveles tan letales como la experimentada treinta años atrás, desvaneció momentáneamente cualquier atisbo de mejora que hubiera podido aparecer en el horizonte. Habrá que esperar, pues, a los años siguientes para que la desolación comience ya a dar paso a un futuro más prometedor; incluso en una de las zonas que la había acusado con mayor severidad. Así, en 1682, el señor de la Daya –que, entre otros títulos, ostentaba el de Conde de Albaterra- consiguió arrendar por un período de seis años el conjunto de la baronía, incluida la percepción de un número indeterminado de *«sensos que responen los enfiteutes [...] y totes les herbes del terme que no auran menester los ganados majors, aixi de vaques con de yegües, de dit Illustre Conde»* por la apreciable cantidad de 100 cahíces de trigo al año. Algunas cláusulas del contrato sugieren, en efecto, que, bajo el

impulso de una nueva coyuntura favorable, se estaba procediendo a una recomposición productiva del señorío, pues además de mencionarse la presencia permanente en él de varios *llauradors de aniaga*, se incluía la obligación «*de reparar lo dit arrendador les cases que de present y a en dita Baronía par a els llauradors, de forma que estiguen conservades y abitables*»²⁶¹. No obstante, la recuperación habría de resultar bastante lenta, al menos en lo que se refiere al elemento humano allí asentado, pues a principios del siglo XVIII el vecindario de la Daya todavía se situaba en torno a la decena de familias.

Y también en otras zonas de la huerta de Almoradí y de sus aledaños las dos últimas décadas de la etapa foral debieron transcurrir en un clima de mayor optimismo, como cabe deducir de la evolución que presentan las curvas de bautismos parroquiales y de recolección del diezmo. Buena prueba de la conciencia de estar iniciando un periodo de despegue agrario fueron sendas iniciativas colonizadoras emprendidas en dos de las más extensas heredades tradicionalmente dependientes del agua del azud. La primera de ellas tuvo lugar, en 1689, en la heredad de Benijófar, que poco tiempo atrás los dominicos habían vendido a un excomerciante afincado en Orihuela deseoso de promoción social. Así, tres años más tarde de haber adquirido por 7.000 libras aquella finca, previamente separada del riego del Azud de Alfaytamí, Jaime Gallego emprendió su conversión en señorío alfonsino de nueva creación mediante el asentamiento en ella de un mínimo de 15 pobladores²⁶². Sin duda, la experiencia debió resultar prometedora, pues al cabo de solo dos años era el caballero oriolano Carlos Pérez de Sarió quien siguió su ejemplo, otorgando también carta de población -en 7 de mayo de 1691- a un número no inferior de colonos, a los que consiguió atraer y asentar en su heredad de Formentera, separada por el río Segura de la anterior²⁶³.

A diferencia de las consecuencias de lo operado en Benijofar, cuyo riego había sido recientemente sustraído de la comunidad de Alfaytamí, la colonización de Formentera sí comportó en el heredamiento una importante novedad -como había ocurrido, seis décadas atrás, con la fundación de la Puebla-, en la medida en que ampliaba la presencia del elemento señorial. Y, si la estrategia de D. Jerónimo Rocamora para la optimización de recursos en un período de crisis había estado entonces orientada a la diversificación de las formas de aprovechamiento ofrecidas por un espacio anfíbio, como era el integrante de

²⁶¹ Archivo Municipal de Elx [AMElx]: *Protocolos de Josep Medina*, 1682, nº 329, fols. 62-67 (gentileza de Jesús Millán).

²⁶² Manuel Culiáñez Celdrán, *Benojófar. Historia de un municipio del Bajo Segura*, Ayuntamiento de Benijófar, 2007, págs. 101-102.

²⁶³ Antonio Gil Olcina y Gregorio Canales Martínez, *Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo Segura*, Universidad de Alicante, Alicante, 2007 (2ª ed. ampliada), pág. 104.

su recién creada baronía, ahora, en una coyuntura de mayor optimismo, se apostaba por impulsar una agricultura intensiva mediante la aplicación de unidades crecientes del factor trabajo. Mas la ampliación del cultivo por zonas deficientemente aprovechadas no fue un objetivo exclusivo de las colonizaciones alfonsinas finiseculares; también trató de lograrse mediante la cesión de espacios abandonados a quienes ofrecían una renovada puesta en valor, como ocurrió en junio de 1700²⁶⁴. Cinco años atrás, un cómputo pormenorizado de toda la huerta irrigada por el azud había registrado todavía un total de 1.343 tahúllas catalogadas como incultas, en las partidas de Cantalobos, Rambla, la Rasga, Matarredona y el Pedregal. Y en 1698 habían llegado a contabilizarse un total de 260, correspondientes a 8 propietarios, que se habían negado a satisfacer las derramas establecidas alegando que aquellas estaban *ermes e incultes*. Pero, en los cinco padrones de regantes entregados a los recaudadores de derramas del azud, relativos al período comprendido entre 1697 y 1703, se observa un incremento constante del total de tahúllas anotadas, en relación con el anterior; de modo que si en el primer año se dispuso el cobro para un total de 13.861, en el último figuraban ya sujetas al pago 16.011 tahúllas²⁶⁵. Lejos habían quedado los tiempos en que la renuncia a la propiedad llegó a contemplarse por algunos regantes como un mal menor, ante la desproporción existente entre costes y beneficios de la explotación agraria.

Síntoma igualmente apreciable de la nueva coyuntura alcista fue la firme voluntad de acometer un plan integral de saneamiento financiero, expresada por los regantes del azud de Alfaytamí, mediante la formalización de concordias con sus principales acreedores entre 1694 y 1696. Se perseguía con estas iniciativas reducir la deuda consolidada que venía hipotecando tradicionalmente la precaria solvencia económica de la comunidad, aunque para ello tuvieran que incrementarse las derramas. La condición de poderoso regante del mayor acreedor —el Marqués de Rafal— facilitó sin duda el acuerdo alcanzado, sobre todo al tratarse al mismo tiempo del representante de la casa nobiliaria que gozó de mayores favores en la historia de la comunidad, incluidas amplias exenciones de derramas. Ajustar las cuentas tras un siglo de estrechas relaciones económicas, iniciadas en tiempos de D. Jerónimo, no era tarea fácil; y, de hecho, no llegaron a clarificarse del todo hasta bien avanzada la centuria siguiente. Mas no fueron los Marqueses de Rafal quienes más influencia ejercieron en el gobierno del azud.

²⁶⁴ Archivo del Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí [AJPAAG]: *Libro nº 3: Mà de determinacions y provisions fetes per los elets dels hereters regants del Azud de Alfaytami desde el any 1665 en avant*, fols. 456-457v.

²⁶⁵ Esta información y toda la que sigue procede de David Bernabé Gil, *Almoradí...*, op. cit., págs. 152-164, donde podrán hallarse mayores detalles y las correspondientes referencias documentales.

Entre los componentes del reducido grupo que, al menos durante el último tercio de la centuria, asumió la dirección de la comunidad, sobresalieron regantes de perfil bien diferente. Desde 1665, en efecto, se detecta la constitución de una junta de electos, integrada por cinco o seis miembros, que, a modo de comisión permanente, intervendrá de forma decisiva en el diseño de las acciones a emprender, desarrollando un protagonismo creciente frente al *consell general de hereters*. Es posible que el origen de esta forma de gobierno se remonte a décadas atrás y que la inexistencia de documentación previa al respecto se deba simplemente a su extravío. Lo que sí puede asegurarse es que, al menos durante el período del que disponemos de datos²⁶⁶ –comprendido entre 1665 y 1681, y entre 1694 y 1703– este *comité* directivo estuvo controlado en su mayor parte por regantes de condición eclesiástica, sin que llegara a faltar una destacada presencia, también, de juristas y oficiales regios; casi todos ellos avecindados en Orihuela.

En efecto, más de la mitad de los componentes conocidos de la junta de electos del azud fueron clérigos, en su mayoría representantes de instituciones –priors de San Agustín y de San Juan (Orihuela), rectores del Colegio de Predicadores (Orihuela) y de la parroquia de san Andrés (Almoradí), corrector del Convento de San Francisco de Paula (Almoradí), deán de la Catedral oriolana–, pero también a título particular –mosén Francisco Senerio (presbítero de Almoradí) y mosén Francisco Basset, (rector de Formentera). De los otros siete miembros conocidos, tres eran juristas oriolanos vinculados a la curia de la Gobernación (los doctores Nicolás Savall, Gaspar Sans y Súniga y Joseph Roca de Togores); D. Luis Togores llegó a desempeñar la Lugartenencia de la Gobernación, Miguel Ruiz Ximénez era caballero oriolano y Francisco Martínez de Xea y Alonso Gómez, vecinos de Almoradí.

Esta peculiar composición social de la junta directiva del heredamiento se explica tanto por la condición de grandes propietarios, que compartía la mayor parte de los allí representados, como por la exigencia tácita de una mínima cultura letrada que avalara la función rectora que de ellos cabía esperar. Es por todo ello –y por la abundancia de regantes forasteros– que la mencionada junta particular se reuniera habitualmente en Orihuela –donde residía la mayoría de aquéllos–, en lugar de hacerlo en Almoradí, sin la presencia del sobrecequero municipal. Pese a todo, gozaban de capacidad deliberativa y, en muchos asuntos, resolutive; aunque las decisiones importantes tenían que someterse a la aprobación de la junta general.

Y si la decisiva presencia de terratenientes forasteros –como también lo eran los señores de la Daya, La Puebla y Formentera– entre los regantes del azud

²⁶⁶ Se trata de las actas de dicha junta de electos, recogidas en un único libro, encuadernado en pergamino, ya referido en *supra*, nota 32.

continuaba siendo una constante que se prolongaba en el tiempo, tampoco parece que hubieran cambiado sustancialmente los mecanismos a través de los cuales aquellos expresaban sus posiciones de poder. En 1698, el firme rechazo desplegado por el barón de la Daya a la recaudación de una derrama en su dominio señorial acabó agotando nuevamente la paciencia de la comunidad, que, en esta ocasión, ya no se conformó con emprender la vía ejecutiva ante los tribunales, sino que solicitó directamente a Carlos II el fortalecimiento de la autoridad hidráulica para vencer tal oposición. Lo que quizás no sospechaban en Almoradí eran las consecuencias institucionales que podían derivarse de dicha petición. Así, la inmediata respuesta regia, formalizada en real carta de 31 de enero de 1699, supuso la transferencia de la jurisdicción de aguas al Asesor de la Gobernación; que era un oficio regio que, desde 1633, llevaba incorporada también la asesoría de todos los sobrecequeros del Bajo Segura. Con este desplazamiento, a un segundo plano, de la figura del sobrecequero se avanzaba un paso decisivo en el proceso de inserción de la jurisdicción hidráulica –de origen municipal– dentro de la órbita de la Corona²⁶⁷. Y, a medio plazo, dicha resolución abría la puerta para la supresión del juzgado de aguas del Azud de Alfaytamí. Pero el modo en que se desarrollaron los acontecimientos que abocaron a esta postrera consecuencia pertenece ya a otro momento histórico, que va más allá de la etapa foral, finiquitada en 1707.

²⁶⁷ El seguimiento de ese proceso, en David Bernabé Gil, «Intervencionismo regio sobre la jurisdicción de aguas en el Bajo Segura [siglos XVI-XVIII] », comunicación presentada en el *IX Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local. Recs històrics: Pagesia, historia i patrimoni*, celebrado en Alguairó [Lleida], del 20 al 22 de octubre de 2016.